



## I

La consulta plantea diversas cuestiones relacionadas con el impacto que en el régimen establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre se deriva de lo resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 24 de noviembre de 2011, así como de las Sentencias del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2012 por las que se anula el apartado b) del artículo 10.2 del citado Reglamento de desarrollo.

En particular, las cuestiones planteadas por la consultante se centran en la incidencia de dichas sentencias en la actividad desplegada por las empresas dedicadas al recobro de deudas y, en particular, en la aplicación a dichas empresas de lo dispuesto en el artículo 7 f) de la Directiva 95/46/CE, cuyo efecto directo fue declarado por la primera de las sentencias citadas anteriormente.

## II

Como cuestión previa, teniendo en cuenta el tenor de las consultas planteadas, debe partirse del hecho de que la Sentencia del Tribunal de Justicia citada ha declarado expresamente el efecto directo del artículo 7 f) de la Directiva 95/46/CE, según el cual “Los Estados miembros dispondrán que el tratamiento de datos personales sólo pueda efectuarse si (...) es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran protección con arreglo al apartado 1 del artículo 1 de la presente Directiva”. Por ello, dicho precepto deberá ser tomado directamente en cuenta en la aplicación de la normativa de protección de datos de carácter personal por los Estados Miembros, y en consecuencia por esta Agencia Española de Protección de Datos, dado que como señala el Tribunal Supremo en su sentencia de 8 de febrero de 2012 “produce efectos jurídicos inmediatos sin necesidad de normas nacionales para su aplicación, y que por ello puede hacerse valer ante las autoridades administrativas y judiciales cuando se observe su trasgresión”.

Tal y como recuerda la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su apartado 38, el artículo 7 f) de la Directiva “establece dos requisitos acumulativos para que un tratamiento de datos personales sea lícito, a saber, por una parte, que ese tratamiento de datos personales sea necesario

para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, y, por otra parte, que no prevalezcan los derechos y libertades fundamentales del interesado” y, en relación con la citada ponderación, el apartado 40 recuerda que la misma “dependerá, en principio, de las circunstancias concretas del caso particular de que se trate y en cuyo marco la persona o institución que efectúe la ponderación deberá tener en cuenta la importancia de los derechos que los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea confieren al interesado”.

Por este motivo, la sentencia señala en su apartado 46 que los Estados miembros, a la hora de adaptar su ordenamiento jurídico a la Directiva 95/46, deberán “procurar basarse en una interpretación de ésta que les permita garantizar un justo equilibrio entre los distintos derechos y libertades fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico de la Unión, por lo, conforme a su apartado 47 que “nada se opone a que, en ejercicio del margen de apreciación que les confiere el artículo 5 de la Directiva 95/46, los Estados miembros establezcan los principios que deben regir dicha ponderación”.

Por tanto, para determinar si procedería la aplicación del citado precepto habrá de aplicarse la regla de ponderación prevista en el mismo; es decir, será necesario valorar si en el supuesto concreto objeto de análisis existirá un interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos que prevalezca sobre el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran protección conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Orgánica 15/1999, según el cual “la presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar” o si, por el contrario, dichos derechos fundamentales o intereses de los interesados a los que se refiera el tratamiento de los datos han de prevalecer sobre el interés legítimo en que el responsable pretende fundamentar el tratamiento de los datos de carácter personal.

En este mismo sentido, el artículo 10.2 a) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que será posible el tratamiento y la cesión de los datos sin contar con el consentimiento de los afectados cuando lo autorice una norma con rango de Ley o una norma de derecho comunitario y, en particular, cuando “el tratamiento o la cesión tengan por objeto la satisfacción de un interés legítimo del responsable del tratamiento o del cesionario amparado por dichas normas, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales de los interesados previstos en el artículo 1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre”.

Por otra parte, es indudable que la Sentencia del Tribunal Supremo ha anulado lo dispuesto en el artículo 10.2 b) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica, pero ello no implica necesariamente que del marco establecido por las normas de protección de datos se haya desplazado de forma absoluta el concepto jurídico de fuentes accesibles al público.



En primer lugar, por cuanto dicho concepto, tanto en la redacción establecida por la Ley Orgánica 15/1999 como en la aclaración efectuada por el artículo 7 del Reglamento de desarrollo sigue encontrándose vigente, sin que dichas previsiones hayan sido objeto de valoración alguna por el Tribunal Supremo. Pero además, y en segundo término, no puede dudarse que el concepto de fuentes accesibles al público como criterio que permitirá efectuar la ponderación prevista por el artículo 7 f) de la Directiva 95/46/CE ha sido expresamente reconocido por la tan citada sentencia de 24 de noviembre de 2012, cuyo apartado 44 señala que “en lo que respecta a la ponderación requerida por el artículo 7, letra f), de la Directiva 95/46, cabe tomar en consideración el hecho de que la gravedad de la lesión de los derechos fundamentales de la persona afectada por dicho tratamiento puede variar en función de que los datos figuren ya, o no, en fuentes accesibles al público”, añadiendo en el apartado 45 que “En efecto, a diferencia de los tratamientos de datos que figuran en fuentes accesibles al público, los tratamientos de datos que figuran en fuentes no accesibles al público implican necesariamente que el responsable del tratamiento y, en su caso, el tercero o terceros a quienes se comuniquen los datos dispondrán en lo sucesivo de ciertas informaciones sobre la vida privada del interesado. Esta lesión, más grave, de los derechos del interesado consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta debe ser apreciada en su justo valor, contrapesándola con el interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos”.

Y en el mismo sentido, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 31 de mayo de 2012, al referirse a la ponderación prevista en el artículo 7 f) de la Directiva señala lo siguiente:

*“Ponderación de intereses en conflicto que dependerá de las circunstancias concretas de cada caso y en la que no obstante, sí puede tomarse en consideración, a efectos de determinar la posible lesión de los derechos fundamentales del afectado, el hecho de que los datos figuren ya, o no, en fuentes accesibles al público. Más ello, simplemente, como un elemento más de ponderación.*

*Es posible, en definitiva, y conforme a dicha Jurisprudencia comunitaria, que existan tratamientos de datos personales que no figuren en una de las que nuestra legislación interna denomina “fuentes de acceso público” (artículo 3.f) LOPD y artículo 7 RLOPD) pero que, sin embargo, no requieran el consentimiento de los titulares de tales datos porque su tratamiento sea necesario para satisfacer un interés legítimo del responsable de los mismos, o del cesionario, siempre que se respeten los derechos y libertades del interesado.”*

De este modo, el efecto que produce la sentencia sobre las normas de protección de datos aplicable y sobre la interpretación de las mismas que ha de

llevar a cabo esta Agencia supone que, en primer lugar, no cabrá considerar que un determinado tratamiento que no se encuentre en uno de los restantes supuestos de legitimación establecidos por el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999 es contrario a dicho precepto sobre la simple base de que los datos no se encuentren recogidos en fuentes accesibles al público pero, en segundo lugar la legitimación de tal tratamiento no procederá en todos los supuestos, dado que siempre será imprescindible llevar a cabo una adecuada ponderación entre el interés legítimo perseguido por el responsable o el cesionario y los derechos de los afectados, y en particular su derecho a la protección de datos.

### III

Por otra parte, y también antes de analizar las concretas cuestiones planteadas por la consultante, esta Agencia es plenamente consciente de la doctrina sentada por las Sentencias de la Audiencia Nacional de 14 de mayo de 2009 y 21 de enero de 2010 que la misma cita en su escrito de consulta.

En las citadas sentencias, así como en la de 22 de julio de 2010, que sigue similar criterio, se hace referencia a la obtención por parte de un encargado del tratamiento contratado por un determinado acreedor de datos adicionales que permiten conocer el domicilio o número de teléfono de un deudor de un determinado contrato en supuestos en los que se ha producido un cambio en los mencionados datos, habiéndose obtenido la información de fuentes tales como ficheros con el carácter de fuente accesible al público, detectives privados o incluso la solicitud de información a familiares del deudor.

Concretamente, la primera de las sentencias citadas resume en su fundamento de derecho cuarto la doctrina de la Audiencia Nacional acerca de la licitud del tratamiento de los datos en estos casos. Así, tras poner de manifiesto que la entidad que recopilaba la información actuaba en todo caso como encargada del tratamiento de la entidad acreedora, señala que no existe vulneración de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, ni de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, al tratarse de datos que ya venía tratando el acreedor sin precisar del consentimiento del deudor y en los que la actividad del encargado consistió en obtener su actualización obteniendo la información de fuentes que a su vez habían recabado lícitamente tales datos. Así, se indica lo siguiente:

*El art. 6 de la LOPD regula el principio del consentimiento, que constituye uno de los pilares básicos de la normativa de protección de datos. Se trata de una garantía fundamental, legitimadora del régimen de protección establecido por la Ley, en desarrollo del derecho fundamental consagrado en el art. 18.4 de la Constitución Española.*

*En el presente caso, como ya hemos expresado, don XXX prestó su consentimiento para el tratamiento de determinados datos personales – nombre y apellidos, domicilio y número de teléfono- en el contexto de una relación contractual entablada con una entidad de crédito, Caja de*



*Ahorros de Canarias. Ningún reproche puede hacerse por tanto por tratar dichos datos.*

*Ocurre, sin embargo, que dichos datos quedaron desactualizados al cambiar el señor XXX de domicilio y número de teléfono y no comunicarlo a la entidad de crédito, manteniéndose no obstante la relación contractual. Pues bien, el consentimiento inicialmente prestado para el tratamiento de unos concretos datos personales –un domicilio determinado y un número de teléfono- continúa proyectándose en el tiempo mientras permanece la relación contractual respecto de datos personales del mismo tipo que los que fueron proporcionados y autorizado su uso siempre que su tratamiento continúe siendo necesario para el cumplimiento o ejecución del contrato, como aquí ocurre. Incluso la propia LOPD prescinde en supuestos como el enjuiciado de la necesidad del consentimiento al establecer como excepción al mismo -en el apartado 2 del art. 6- que no es necesario el consentimiento cuando los datos se refieran a las partes de un contrato o precontrato y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento. La razón de esta excepción radica indudablemente en la existencia de un consentimiento previo que se otorgó en el momento de la formalización del contrato, siendo razonable que no se exija dicho consentimiento cuando sea necesario el tratamiento de dichos datos de carácter personal. Como es evidente, ASINCO, que actúa como encargada del tratamiento, realiza su actividad para el cumplimiento del contrato de préstamo suscrito entre el señor XXX y la Caja de Ahorros de Canarias y este contrato exige para su cumplimiento el tratamiento de los datos personales del domicilio y del número de teléfono de dicho señor para poder comunicar con él, especialmente cuando se constituye en mora y deja de cumplir con sus obligaciones, siendo indiferente a estos efectos que los concretos datos de domicilio y número de teléfono hayan cambiado pues su tratamiento está amparado en el consentimiento inicial o, en todo caso, en la excepción contenida en el art. 6.2 de la LOPD.*

*No se ha producido, por tanto, ninguna infracción del principio del consentimiento por lo que procede estimar el recurso contencioso-administrativo y anular la resolución recurrida.*

De este modo, la Sentencia pone de manifiesto que un responsable podrá proceder a la actualización de los datos de carácter personal que viniera tratando, bien con el consentimiento del interesado, bien sin necesidad del mismo al encontrarse tal tratamiento amparado por el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 15/1999, lo que en el fondo no es más que una materialización del deber de actualización y exactitud establecido en el artículo 4.3 de la Ley Orgánica 15/1999, según el cual “Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado”.

En este sentido, si bien el artículo 8.5 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica pone de manifiesto que “Si los datos fueran recogidos directamente del afectado, se considerarán exactos los facilitados por éste”, ello no es óbice para que la entidad que lícitamente esté tratando los datos adopte las medidas necesarias para su adecuada rectificación de oficio cuando tenga conocimiento de que los datos objeto de tratamiento son inexactos.

Ahora bien, como ya señalaba esta Agencia en informe de 25 de abril de 2011, “para que lo que acaba de anticiparse sea posible será necesario, por una parte, que la recolección de los datos actualizados se lleve a cabo por la propia entidad legitimada para hacerlo, bien directamente, bien a través de un encargado del tratamiento que opere en su nombre. Además, será necesario que los datos actualizados se obtengan lícitamente, procediendo de quienes se encontrasen legitimados para tratarlos o cederlos, como sucedería en caso de que los datos fueran tratados por detectives privados, autorizados para ello por la legislación de seguridad privada, añadiendo que “la doctrina sentada por la Audiencia Nacional en las sentencias a las que se ha venido haciendo referencia no legitima la mera recopilación de información para su mera puesta a disposición de quien quisiera acceder a la misma, sino que únicamente legitima al que ya se encuentra legitimado para el tratamiento”.

En este sentido, debe recordarse que la propia Audiencia ha considerado contraria a la Ley Orgánica 15/1999 la recogida, recopilación y comunicación de información referida a gran parte de la población española para su mera puesta a disposición de terceros que la soliciten a cambio de una contraprestación.

Así, puede hacerse referencia, entre otras, a las Sentencias de 20 de mayo y 12 de noviembre de 2010, referidas a un responsable que mantenía un fichero con datos de 37 millones de personas para la mencionada puesta a disposición de los terceros que lo solicitasen, señalando precisamente en relación con el hecho de que los datos habían sido obtenidos de investigadores privados que:

*“Argumenta también Saberlotodo que viene actualizando los datos de los particulares contenidos en sus bases de datos mediante una mercantil dedicada a la seguridad privada y ningún detective privado tiene obligación de desvelar sus fuentes de información amparándose en el secreto profesional que asiste a su labor profesional. Argumentación que podría justificar, en su caso, la exención de la necesidad de consentimiento para la inclusión de los datos personales en los ficheros de tal empresa de detectives, pero no para la inclusión de los datos en los propios ficheros de la entidad sancionada y su cesión a un tercero.*

*En definitiva, ha quedado acreditado que Saberlotodo comunicó los datos personales del señor XXX sin que haya demostrado que contaba con su consentimiento, cesión indebida de datos que constituye una infracción del artículo 11.1 de la LOPD, tipificada como muy grave en el*



*artículo 44.4.b) de la citada Ley Orgánica, procediendo, por ello, la desestimación del recurso.”*

Esta doctrina ha sido expresamente ratificada por la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de mayo de 2012, referida a la misma entidad y que resulta particularmente relevante, al guardar estrecha relación con una de las citadas expresamente por la consultante en su escrito.

Por tanto, ciertamente la Audiencia Nacional ha venido otorgar a las empresas de recobro que actúan como encargadas del tratamiento la misma legitimación con la que cuenta su cliente para el tratamiento de los datos relativos a los deudores, pero ello no implica en modo alguno que de este modo se haya establecido una regla general de legitimación que implique la licitud del tratamiento de cualquier dato del citado deudor procedente de cualquier fuente y con independencia de que sea o no lícita la legitimación con que contase dicha fuente para tratar el dato.

#### IV

Hechas todas estas consideraciones ya resulta posible entrar a valorar las consultas expresamente formuladas por la consultante. Según la primera de ellas se plantea si esta Agencia “dejará de exigir a las empresas de gestión de recobro de deudas”, como consecuencia de las sentencias anteriormente analizadas “responsabilidades solidarias o subsidiarias provenientes del cedente o independientes y propias” en los supuestos en los que dicho cedente carezca de legitimación para el tratamiento de los datos, añadiendo que lo que se pretende es saber si la Agencia “dejará de sancionar al cesionario” en estos casos, dado que las empresas de recobro carecerán, a su juicio de capacidad para valorar si los datos han sido lícitamente tratados por el cedente.

Como cuestión previa, es preciso indicar que en ningún lugar de la legislación de protección de datos se prevé la imposición de responsabilidad solidaria o subsidiaria alguna como consecuencia de la comisión de una infracción por un determinado cedente de los datos. Lo que sí será sancionable, y así se ha venido sancionando, es la responsabilidad directa que concurre en quien trata los datos sin legitimación suficiente para ello, en el caso planteado, como consecuencia de la ilicitud del tratamiento llevado a cabo por el cedente del que los datos se recibieron.

Y ello resulta especialmente relevante, dado que esa responsabilidad directa e independiente en que puede incurrir el cesionario no deviene sólo del mero hecho de que la conducta del cedente implique un tratamiento ilícito de datos, sino también de la falta de adopción por su parte de medidas de diligencia suficiente que le hubieran permitido considerar la ilicitud del tratamiento de los datos que le sirve de fuente para su propio tratamiento.

Así, si se analiza detenidamente lo planteado en la consulta cabría concluir que dado que la empresa de gestión de recobro cuenta con la legitimación para el tratamiento que ostenta la entidad acreedora puede proceder al tratamiento de cualquier dato procedente de cualquier fuente o de cualquier empresa, sin valorar siquiera si los datos que pretenden obtenerse cumplen aunque sea mínimamente los principios contenidos en la Ley Orgánica 15/1999. Así podría obtenerse cualquier dato con independencia de su exactitud, de si el mismo cumple el principio de proporcionalidad o si debería haberse cesado en su tratamiento en el momento en que el dato fue obtenido sobre la simple base de que quien lo recaba es una empresa dedicada a la gestión de recobros. Por tanto podría considerarse, llevando la consulta planteada al extremo, que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las posteriormente dictadas por el Tribunal Supremo han exonerado del sometimiento al régimen de protección de datos a las entidades dedicadas a esta actividad.

De este modo, y como ya se ha indicado con anterioridad, para que pueda considerarse que un tratamiento llevado a cabo por una determinada empresa de recobro es conforme a derecho será preciso que sea igualmente lícita la cesión del dato que a la misma se haya comunicado, lo que lógicamente no podrá tener lugar en aquéllos supuestos en que el cedente ha tratado el dato de forma ilícita y sin la suficiente legitimación exigible para ello.

Ello resulta particularmente relevante en determinados supuestos de los citados en la primera de las consultas relacionadas por la consultante, por cuanto la ilicitud en el tratamiento de los datos de determinadas fuentes no sólo ha sido declarada por esta Agencia, sino que ha sido confirmada por la Audiencia Nacional e incluso por el Tribunal Supremo, por lo que el tratamiento de los datos procedentes de dichas fuentes por una entidad de gestión de recobros se realizaría no sólo sin las debidas medidas de diligencia, sino con conocimiento específico de la ilicitud del mismo.

En consecuencia, la regla de ponderación prevista en el artículo 7 f) de la Directiva 95/46/CE no puede dar lugar a que tratamientos ilícitos devengan lícitos por la sola alegación de la ignorancia del cesionario acerca del modo en que los datos fueron obtenidos. De este modo, dicho cesionario habrá de adoptar las medidas que garanticen que ha cumplido diligentemente con lo exigido por la Ley Orgánica 15/1999, en términos similares a las que se describe en la consulta que se venían desarrollando hasta la fecha, si bien la mera constancia de que los datos consten en fuentes accesibles al público no será más que un criterio que permita ponderar la aplicabilidad de la regla contenida en el artículo 7 f) en beneficio del interés legítimo de la cedente y de la cesionaria.

## V

La segunda de las cuestiones planteadas puede a su vez desdoblarse en dos, por cuanto se plantea si las empresas de gestión de recobros pueden utilizar datos obtenidos en cumplimiento de un encargo para otros encargos





posteriores que les realicen otros acreedores y se hace posteriormente referencia a una serie de fuentes de información respecto de las que se plantea si será lícita la obtención de los datos.

En cuanto a la segunda de estas cuestiones, ya se ha indicado en un lugar anterior de este informe que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo han reiterado en las sentencias a las que se refiere la consulta que, frente a un regla rígida de determinación de los supuestos en que el tratamiento será legítimo, como la que es precisamente anulada por el Tribunal Supremo, la aplicabilidad de la regla de ponderación establecida en el artículo 7 f) de la Directiva 95/46/CE impone precisamente el análisis de las circunstancias concurrentes en cada concreto supuesto de tratamiento, lo que impide otorgar una respuesta concreta a la cuestión planteada, siendo preciso responder acerca de la legitimación para el tratamiento caso por caso.

En todo caso, y sin que ello implique una respuesta terminante a la cuestión cabe recordar que en los supuestos en los que la Ley legitime el tratamiento (como sucedería en el caso de los registros públicos en los términos que su normativa específica establezca) o quepa hacer referencia a una fuente accesible al público (como en el caso de listados de profesionales libremente accesibles) la ponderación jugará en la mayor parte de los supuestos a favor del tratamiento, mientras que en otros, como el mero hecho de que la información se encuentre en Internet o sea accesible ante motores de búsqueda, debería estarse a la ponderación específica de cada caso concreto, teniendo en particular en cuenta el perjuicio que puede causarse a los derechos del propio interesado.

Cuestión aparte es la referida a la utilización de información recabada por la empresa gestora de recobros de la información recabada en el marco de una actividad requerida por un determinado acreedor en las actuaciones que se refieran a otros acreedores o al mismo acreedor como consecuencia de un nuevo encargo del tratamiento.

Como se ha indicado con anterioridad, la Audiencia Nacional ha venido considerando en la más reciente doctrina que las empresas de gestión de recobros tienen la condición de encargadas del tratamiento en relación con el acreedor responsable, lo que, precisamente, legitima que por las mismas se recaben los datos del deudor necesarios para que las entidades acreedoras puedan mantener actualizados sus datos y determina que esa legitimación sea precisamente la que corresponde al acreedor.

Pues bien, el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999 regula claramente el marco normativo al que queda sometido el encargado del tratamiento, estableciendo dos reglas terminantes:

- Por una parte, el encargado, que trata los datos por cuenta del responsable, no podrá utilizar los datos para ninguna otra

finalidad, por cuanto en ese caso devendría responsable del tratamiento (artículo 12.4).

- Por otra, al término del contrato, los datos habrán de ser destruidos o devueltos al responsable (artículo 12.2), bien directamente bien a quien dicho responsable designe (tal y como especifica el Reglamento), sin que el encargado pueda conservar dichos datos salvo para poder responder ante el responsable de las responsabilidades en que hubiera podido incurrir como consecuencia del tratamiento. En este último caso, el Reglamento establece claramente que los datos deberán ser objeto de bloqueo.

Ello implica que el encargado únicamente puede emplear los datos obtenidos como consecuencia de un encargo en el marco del propio encargo, por lo que aplicar estos datos a otra actividad distinta de la específicamente regulada en el encargo implicaría una infracción del artículo 12.2 de la Ley Orgánica, siendo así que si dichos datos se conservan o utilizan una vez terminado ese encargo se estaría vulnerando igualmente lo dispuesto en el artículo 12.2 de la citada Ley Orgánica.

Efectivamente, en ese caso el encargado habrá devenido responsable y no contará ya con la legitimación derivada de aquel responsable al que prestó el servicio, y que ha sido la reconocida por la doctrina de la Audiencia Nacional. De este modo, si se conserva el dato o se utiliza para otros fines será precisa la concurrencia de una nueva causa de legitimación, lo que podrá existir en determinados casos, pero podrá no concurrir con carácter general ni en los mismos términos derivados de la doctrina de la Audiencia Nacional.

Por tanto el tratamiento de estos datos debería contar con una legitimación independiente a la que se deriva del acreedor responsable, debiendo en particular tenerse en cuenta las consideraciones vertidas a lo largo de este informe.